

## Los costes del no

ANTONI GUTIÉRREZ DÍAZ

LA VANGUARDIA - 31/05/2006

Las consecuencias del no al proyecto de Constitución europea en Francia y Holanda, tras un año, permiten valorar, con cierta perspectiva, las consecuencias de aquellos resultados. Nadie puede negar que la falta de perspectivas a favor de *otra Europa posible*, sin una correlación de fuerzas social, política o institucional que permita forjar un consenso suficiente para avanzar en el proceso que nos lleve a la consolidación democrática de la Unión, nos ha dejado en el marco institucional insatisfactorio del tratado de Niza, en el que el no a la Constitución ha desencadenado una dinámica centrífuga a favor de las políticas propias de cada Estado. "Un proyecto empantanado", escribía un experto europeísta como es Jaime Arias en las páginas de *La Vanguardia* el pasado 27 de mayo, apreciación que horas más tarde confirmarían los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión al alargar, una vez más, el llamado periodo de reflexión.

De este clima de confusión sólo han sacado provecho las corrientes antieuropeístas que aspiran a mantener la UE como zona de libre cambio, sin políticas sociales ni control político democrático, porque hay que aceptar, cuando menos hasta hoy, que los europeístas defensores del no aún no han ofrecido ni una alternativa creíble (más allá del testimonialismo) ni reflexión autocrítica que abra paso a la acción conjunta de todos los europeístas, los del no y los del sí. En este contexto, lo que se puede contabilizar son los costes de la *no Europa*, desde la pérdida de protagonismo internacional o el desencanto y confusión entre los ciudadanos europeos, hasta la ausencia de respaldo institucional a los derechos fundamentales y la persistencia de la capacidad de veto legislativo y ejecutivo de los gobiernos estatales en la toma de decisiones, sin olvidar la repercusión negativa sobre los acuerdos presupuestarios para los próximos siete años.

Cierto que el andamiaje institucional acumulado durante cincuenta años de existencia de la Unión asegura su supervivencia, pero, en una situación

caracterizada por la dinámica acelerada que imprime la globalización, estar detenido es caminar hacia atrás.

Decir no sin tener definida una hoja de ruta que abra mejores perspectivas es una irresponsabilidad testimonial. Este razonamiento, con el que estoy de acuerdo, se lo oí a un joven político que defendía votar sí en el referéndum sobre el Estatut, y sus palabras me sugirieron las analogías entre los dos referendos. También en el caso del referéndum catalán, el no preconizado por algunos, más allá del desahogo personal o colectivo de sus frustraciones, no abre en el horizonte una perspectiva de mejora de los contenidos conseguidos en la negociación preceptiva que establece la Constitución vigente. Un no lo que comporta es la renuncia a todos los avances que supone aprobar el proyecto, como por ejemplo la nueva capacidad competencial -que, entre otras cosas, significa una mejora social, lo que ha llevado a los sindicatos a pedir el sí-, el avance sustancial de los recursos financieros o el encaje de Catalunya en la UE. Decir no, sin negar que sea legítimo, no puede separarse de las consecuencias negativas que puede suponer, que en el mejor de los casos será quedarse con las competencias que conseguimos en 1979, sin olvidar lo que significaría como descrédito de nuestra credibilidad identitaria o el aprovechamiento demagógico que los sectores antieuropeístas - quiero decir antiautonomistas- podrían hacer de la confusión que se crearía con una hipotética victoria del no al Estatut.

Estas reflexiones de nada sirven a los que quieren congelar el proceso federalizante del Estado, pero quieren ser una invitación a considerar su actitud a quienes, reclamándose defender los intereses de Catalunya, piensan votar no, en especial a aquellos que ya lo hicieron así en el referéndum sobre el proyecto de Constitución europea y tienen pendiente valorar los costes de su no y la incapacidad de administrar la desorientación generada, como la experiencia nos ha demostrado.

ANTONIO GUTIÉRREZ DÍAZ, ex vicepresidente del Parlamento Europeo